



Asamblea General

Distr. general
5 de noviembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
37º período de sesiones
18 a 29 de enero de 2021

Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Saint Kitts y Nevis*

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

I. Antecedentes

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 16/21, teniendo en cuenta la periodicidad del examen periódico universal. Constituye un resumen de las comunicaciones¹ de cuatro partes interesadas para el examen periódico universal, presentadas de forma resumida debido a las restricciones relativas al número de palabras.

II. Información proporcionada por las partes interesadas

A. Alcance de las obligaciones internacionales² y cooperación con los mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos³

2. En la comunicación conjunta 1 (JS1), The Advocates for Human Rights y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte señalaron que se había recomendado a Saint Kitts y Nevis que firmara o ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que decretara una moratoria de la pena de muerte o procediera a su total abolición. Saint Kitts y Nevis no había aceptado ninguna de esas recomendaciones⁴.

3. En la JS1 se recomendó a Saint Kitts y Nevis que ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte⁵.

4. El Center for Global Nonkilling (CGNK) recomendó que se procediera, con carácter urgente, a ratificar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y que se ratificaran sin dilación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviada a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.



Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas⁶.

5. Just Attonement Inc. (JAI) recomendó a Saint Kitts y Nevis que firmara, ratificara y aplicara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable

1. Cuestiones transversales

*Igualdad y no discriminación*⁸

6. Human Rights Watch (HRW) informó de que, desde el último examen periódico universal de Saint Kitts y Nevis, había realizado investigaciones en el país y había constatado que la discriminación, la violencia, la estigmatización y los prejuicios obstruían el disfrute de los derechos fundamentales por las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). HRW recomendó que se derogaran los artículos 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Integridad Personal, en los que se tipificaban como delito las relaciones homosexuales consentidas⁹. JAI formuló la misma recomendación¹⁰.

7. HRW subrayó que Saint Kitts y Nevis no contaba con ninguna ley de amplio alcance que prohibiera la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual, en particular en los ámbitos del empleo, la vivienda, el acceso a la educación y la atención de la salud¹¹. En ese contexto jurídico deficiente, la discriminación contra las personas LGBT se filtraba en las actividades cotidianas, por ejemplo en la utilización de servicios como los de atención de la salud, en la escuela o en los desplazamientos en autobús, y en actividades sociales como ir al cine o ir de compras. También se daban casos de discriminación laboral. Además, las personas LGBT que sufrían discriminación en cualquier sector carecían de vías jurídicas para obtener reparación y exigir que los autores rindieran cuentas¹².

8. HRW recomendó a Saint Kitts y Nevis que aprobara leyes de amplio alcance contra la discriminación que prohibiesen la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual, en particular en los sectores del empleo, la vivienda, el acceso a la educación y la atención de la salud, y que definiera medidas eficaces para detectar y prevenir esa discriminación y responder a ella¹³. JAI recomendó al país que adoptara medidas afirmativas para proteger los derechos de las personas LGBT¹⁴.

9. JAI reiteró que el derecho internacional de los derechos humanos había venido protegiendo el derecho a la privacidad y el derecho a la protección frente a actos arbitrarios e ilícitos que atentaran contra la vida privada y familiar o supusieran una injerencia en ella. También se protegían la reputación o la dignidad propias. El derecho internacional de los derechos humanos establecía además que las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género estaban protegidas por el derecho a la privacidad y por el derecho a la protección frente a actos arbitrarios e ilícitos que atentaran contra la vida privada y familiar o la reputación o la dignidad propias o supusieran una injerencia en ellas. Al tipificar las relaciones homosexuales en el código penal, Saint Kitts y Nevis estaba vulnerando esas obligaciones internacionales. Por otro lado, Saint Kitts y Nevis era miembro de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), que trabajaba para aumentar la protección de los derechos humanos en la región, y, como tal, el país debía aprobar leyes para proteger la salud social, física y mental de las personas LGBT¹⁵.

Desarrollo, medio ambiente y las empresas y los derechos humanos

10. JAI informó de que la acidificación de las aguas que rodeaban Saint Kitts y Nevis no había dejado de aumentar a causa de las emisiones de carbono absorbidas por el océano, lo que estaba dando lugar a una severa pérdida del ecosistema. La acidificación también

amenazaba las fuentes de alimentos. Además, la población de Saint Kitts y Nevis se enfrentaba a los efectos perjudiciales cada vez más intensos de la intrusión salina debida al aumento del nivel del mar y al cambio climático. A medida que el nivel del mar aumentaba, el agua salada se desplazaba hacia el interior de las islas y se infiltraba en los acuíferos, por lo general cuando se producían tormentas o durante las mareas altas. En casos extremos, la intrusión salina podía dar lugar al abandono definitivo de pozos¹⁶.

11. JAI consideraba alarmante que Saint Kitts y Nevis no estuviera preparado para los efectos del cambio climático y que, a consecuencia de ello, la vida de sus ciudadanos corriera grave peligro ante la inminente crisis climática. Según JAI, se necesitaban urgentemente medidas para proteger a los ciudadanos de Saint Kitts y Nevis de daños inmediatos derivados de la crisis climática¹⁷. JAI recomendó a Saint Kitts y Nevis que, a fin de prevenir conflictos debidos a la emigración masiva inducida por el cambio climático, adoptara medidas adecuadas junto con otros Estados nación en preparación para posibles situaciones de conflicto¹⁸.

12. JAI también recomendó a Saint Kitts y Nevis que procediera de inmediato a prever medidas más robustas en preparación para el cambio climático y la inminente crisis climática, e instó al Gobierno a que adoptara preparativos de amplio alcance para hacer frente a la crisis climática antes de que finalizara 2020¹⁹.

13. En relación con la buena gobernanza, JAI recomendó a Saint Kitts y Nevis que aplicara la Ley de Integridad en la Vida Pública y adoptara medidas afirmativas para prevenir la corrupción, a fin de garantizar un nivel suficiente de confianza en el Gobierno con vistas a evitar disturbios políticos y democráticos. La corrupción era un ejemplo claro de deficiencia en la democracia. Pese a la vigencia de la Ley de Integridad en la Vida Pública, un instrumento de lucha contra la corrupción que se había aprobado en 2013, se habían planteado serias preocupaciones en cuanto a la aplicación por parte del país de sus programas de Ciudadanía por Inversión y Residencia por Inversión. Por tanto, cabía pensar que el Gobierno estaba utilizando la Ley de un modo que propiciaba el blanqueo de dinero y la admisión indebida de personas que podían constituir una amenaza para la seguridad nacional debido a la falta de procedimientos de investigación adecuados²⁰.

2. Derechos civiles y políticos

*Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona*²¹

14. En la JS1 se señaló que la ejecución más reciente en el Caribe anglófono se había llevado a cabo en Saint Kitts y Nevis el 19 de diciembre de 2008. En una causa anterior, Everson “Blee” Mitcham había pasado más de 17 años en el corredor de la muerte, tras haber sido condenado el 26 de junio de 2001, pero, en octubre de 2018, el Tribunal Supremo del Caribe Oriental había conmutado su pena de muerte por la de cadena perpetua, por considerar que una orden de ejecución contra Mitcham equivaldría ya a una pena inhumana o degradante, en vista de su prolongada privación de libertad. No obstante, Saint Kitts y Nevis no había abolido la pena de muerte y tampoco había atendido a varias de las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de 2015 en relación con esa pena y con la tortura²².

15. En la JS1 se recomendó a Saint Kitts y Nevis que aboliera la pena de muerte y la sustituyera por una sanción justa, proporcionada y conforme con las normas internacionales de derechos humanos; que conmutara las penas de muerte aún vigentes; y que decretara una moratoria de la pena de muerte, con efecto inmediato y retroactivo²³.

16. En la JS1 se afirmó que, pese a los esfuerzos por mejorar la capacitación de los funcionarios penitenciarios, se habían recibido denuncias de palizas y torturas infligidas en el Centro Penitenciario de Su Majestad de Basseterre. En marzo de 2018, Kevin Kelly había sido hospitalizado después de que tres funcionarios de la prisión lo hubieran encadenado en el cuarto de baño y le hubieran dado una paliza. En febrero de 2018, Alistair Isaac había sufrido una fractura en la pierna al impactarle de lleno una bala disparada indiscriminadamente por un funcionario penitenciario. No se había informado de ninguna respuesta de las autoridades en relación con el incidente de marzo de 2018²⁴.

17. En la JS1 se recomendó a Saint Kitts y Nevis que realizara investigaciones fidedignas, independientes e imparciales de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos presuntamente infligidos en los centros penitenciarios y que publicara los resultados de todas esas investigaciones²⁵.

18. En la JS1 también se recomendó a Saint Kitts y Nevis que prohibiera las condenas que conllevaran castigos corporales, incluidos los azotes, en reconocimiento de que ese tipo de castigos contravenía la prohibición constitucional de la tortura y las penas inhumanas o degradantes²⁶.

Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho

19. En la JS1 se recomendó a Saint Kitts y Nevis que siguiera reconociendo la competencia del Comité Judicial del Consejo Privado y del Tribunal Supremo del Caribe Oriental para conocer de recursos penales interpuestos contra decisiones de sus tribunales²⁷. Se añadió además que la capacitación del personal penitenciario debía incluir formación completa en materia de derechos humanos, impartida en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil de la región²⁸.

Derecho a participar en la vida pública y política

20. El CGNK puso de relieve el derecho de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y todas las personas y grupos sociales vulnerables a participar en la adopción de decisiones²⁹.

3. Derechos económicos, sociales y culturales

Derecho a la salud

21. En la JS1 se recomendó que se mejoraran las condiciones de reclusión, en particular en lo relativo a la alimentación, la atención de la salud, el saneamiento y las medidas de cuarentena, a fin de reducir al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), prestando particular atención a las personas que corrían mayor riesgo³⁰.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org.

Civil society

Individual submissions:

CGNK	The Center for Global Nonkilling; Geneva (Switzerland);
HRW	Human Rights Watch; Washington DC (USA);
JAI	Just Atonement Inc; New York (USA).

Joint submissions:

JS1	Joint submission 1 submitted by: Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty (USA).
-----	---

² The following abbreviations are used in UPR documents:

ICERD	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR	Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1	Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2	Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty;
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
OP-CEDAW	Optional Protocol to CEDAW;
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or

	Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT	Optional Protocol to CAT;
CRC	Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC	Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict;
OP-CRC-SC	Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC	Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD	Optional Protocol to CRPD;
ICPPED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

- ³ For relevant recommendations see A/HRC/31/16, paras 91.1–91.18.
- ⁴ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 1.
- ⁵ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 1.
- ⁶ Submission of CGNK, pp. 6-7.
- ⁷ Submission by Just Atonement Inc (JAI), paras. 22-23.
- ⁸ For relevant recommendations see A/HRC/31/16, paras 91.32, 91.37, 91.38, 91.44.
- ⁹ Submission of Human Rights Watch, p. 3.
- ¹⁰ Submission by Just Atonement Inc (JAI), paras. 22-23.
- ¹¹ Submission of Human Rights Watch, p. 3.
- ¹² Submission of Human Rights Watch, p. 4.
- ¹³ Submission of Human Rights Watch, p. 4.
- ¹⁴ Submission by Just Atonement Inc (JAI), para. 20.
- ¹⁵ Submission by Just Atonement Inc (JAI), paras. 22-23.
- ¹⁶ Submission by Just Atonement Inc (JAI), paras. 7-8.
- ¹⁷ Submission by Just Atonement Inc (JAI), para. 1.
- ¹⁸ Submission by Just Atonement Inc (JAI), para. 3.
- ¹⁹ Submission by Just Atonement Inc (JAI), para. 17.
- ²⁰ Submission by Just Atonement Inc (JAI), paras. 28-29.
- ²¹ For relevant recommendations see A/HRC/31/16, paras.91.28–91.40.
- ²² Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 1.
- ²³ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 6.
- ²⁴ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 5.
- ²⁵ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 6.
- ²⁶ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, page 7.
- ²⁷ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 7.
- ²⁸ Submission from the Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty, p. 7.
- ²⁹ Submission of CGNK, p. 5. For relevant recommendations see A/HRC/31/16, paras 91.32, 91.37, 91.38, 91.44.
- ³⁰ Submission from Advocates for Human Rights and the World Coalition Against the Death Penalty (USA).